

Fernando Carrión M. / Grace Benalcázar Z.

Políticas integrales y convivencia en las ciudades de América Latina: servicios urbanos e inclusión



cifal
Barcelona



unitar
United Nations Institute for Training and Research



OLACCHI
Organismo Latinoamericano
y del Caribe de Capacitación

Quito
DISTRITO
METROPOLITANO

Con el apoyo de



VEOLIA
ENVIRONNEMENT

PROACTIVA
MEDIO AMBIENTE

© OLACCHI

El Quinde N45-72 y De Las Golondrinas

Quito, Ecuador

Tel.: (593 2) 246 2739

olacchi@olacchi.org

www.olacchi.org

CIFAL-Barcelona

Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Ctra. C-17

Barcelona-Ripoll, km 13,5

08100 - Mollet del Vallès (Vallès Oriental)

Barcelona, España

Tel: +34 93 343 52 29

Fax: +34 93 343 52 30

www.cifalbarcelona.org

UNITAR

Chemin des Anemones

CH 1219, Chatelaine

Geneve, Suisse

Tel: +41 (0) 22 917 88 42

Fax: +41 (0) 22 917 89 93

www.unitar.org/ldp

Ilustre Municipio

del Distrito Metropolitano de Quito

Palacio Municipal

Venezuela entre Chile y Espejo

Quito-Ecuador

sitioweb@quito.gov.ec

www.quito.gov.ec

ISBN: 978-9978-370-08-7

Cuidado de la edición: Gabriela Chauvin Ochoa

Diseño de portada e interiores: Antonio Mena

Imprenta: Crearimagen

Primera edición: septiembre de 2009

Índice

PRESENTACIÓN	7
AGRADECIMIENTOS	9
INTERVENCIONES PROTOCOLARES	15
<i>Carlos González, Carlos Lopes, Joachim Bitterlich, Dominique Héron, Fernando Carrión, Joan Saura i Laporta</i>	
INTRODUCCIÓN	
Sociedad, ciudad y gobierno: trípede de la convivencia ciudadana . . .	45
<i>Fernando Carrión M. / Grace Benalcázar Z.</i>	
GESTIÓN URBANA INTEGRAL Y CONVIVENCIA	
Gobernabilidad y nuevos territorios	73
<i>Jordi Borja</i>	
Urbanismo y espacio público: oportunidades para fomentar cultura ciudadana	97
<i>Antanas Mockus</i>	
Quito: una experiencia de gestión integral para la convivencia	107
<i>Diego Carrión Mena</i>	
ESPACIO PÚBLICO, CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA	
Violencia urbana: un asunto de ciudad	119
<i>Fernando Carrión M.</i>	

Metrópolis y recuperación urbana: ¿la comparación Europa-América Latina es pertinente?	149
<i>Hélène Rivière d'Arc</i>	
Las ciudades y el desafío político de la seguridad	165
<i>Andrés Antillano</i>	
Agua y metrópoli: buscando la sostenibilidad. El reto de la Ciudad de México por agua potable	183
<i>Gustavo Rodríguez Elizarrarás</i>	
ACCESO A LA CIUDAD, SERVICIOS Y CONVIVENCIA	
Gestión de los servicios básicos y convivencia	217
<i>Juan A. Neira Carrasco</i>	
¿Por qué se dejan tantas vidas sobre el asfalto? Muerte en las calles, seguridad vial y ciudadana	229
<i>Ricardo Montezuma</i>	
Movilidad en Santiago: un camino hacia la integración	247
<i>Marco Carmach Botto</i>	
RIESGOS URBANOS E INCLUSIÓN SOCIAL	
Aliviando el peso de problemas ambientales: del diagnóstico a la acción colaborativa en Moreno, Buenos Aires, Argentina	265
<i>Gastón Urquiza</i>	
Convivencia bajo riesgo	289
<i>Germán Solinís</i>	
Servicios urbanos e inclusión	303
<i>Gonzalo Ramírez G.</i>	

Introducción

Sociedad, ciudad y gobierno: trípode de la convivencia ciudadana

Fernando Carrión M.*

Grace Benalcázar Z.**

En América Latina el patrón de urbanización vive un franco y profundo proceso de transformación. Hasta la década de los años ochenta, la lógica de la urbanización se dirigió hacia la expansión periférica bajo una tendencia exógena y centrífuga (periferización y metropolización); pero desde este momento se vive una mutación caracterizada de endógena y centrípeta, pero en un contexto de mundialización que conduce a una urbanización caracterizada como *introspección cosmopolita* (Carrión, 2002); es decir, de regreso a la ciudad construida en medio de la globalización.

Esta nueva condición de la urbanización en América Latina produce un cambio importante en el concepto de ciudad: se pasa de *ciudad frontera* nacida en el contexto de la primera modernidad, al de *ciudad en red* propio de la posmodernidad, en la que mucho tienen que ver los procesos concurrentes de globalización, reforma del Estado y de transición demográfica, que configuran una nueva coyuntura urbana.

* Concejal del Municipio de Quito. Editorialista diario *Hoy* y Coordinador del Programa de Estudios de la Ciudad de FLACSO, sede Ecuador.

** Secretaria General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos OLACCHI y Académica de la Universidad San Francisco de Quito.

Globalización y localización

A escala mundial se vive el fenómeno de la globalización social, cultural y económica que produce, paradójicamente, una tendencia creciente hacia la concentración de sus efectos a nivel local (Borja, 1994). En otras palabras, la globalización requiere de lugares estratégicos –las ciudades– para proyectarse de manera ubicua por el territorio planetario (Sassen, 1997). Sin embargo, lo local solo tiene viabilidad en un número reducido de sitios y de acuerdo con el lugar que tengan dentro del sistema urbano global; es decir que la condición estratégica de las ciudades depende del posicionamiento venido de la conectividad y la competitividad.¹

Este proceso de transformación introduce cambios notables, al menos, en los siguientes aspectos que tienen que ver con el tema que nos ocupa:

Primero, existe una reducción de la distancia por la aproximación relativa de los territorios distantes y la modificación de la geografía planetaria, fenómenos que llevan a una reducción de la barrera espacial que se opone a la generalización del mercado y a la anulación del espacio por la disminución del tiempo de traslado (Martner, 1995) y, en términos metodológicos, a un cambio en los conceptos del desarrollo urbano vinculados con la accesibilidad, centralidad, velocidad y al paso de su consideración físico-espacial a una mucho más comprensiva e integral (económica, cultural).

Segundo, se aceleran y multiplican las historias en espacios cada vez más distintos y distantes, por lo que la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la democracia (el respeto a la heterogeneidad). A partir de este momento, la distinción entre igualdad y equidad se hace ostensible.

1 “El tamaño o la importancia de un actor dependen del tamaño de las redes que puede comandar, y el tamaño de las redes depende del número de actores que puede agrupar. Como las redes consisten en el número (grande) de actores que tienen posibilidades diferentes para influenciar a otros miembros de la misma red, el poder específico de un actor depende de su posición dentro de la red” (Randolph, 2000: 28).

Tercero, el espacio principal de socialización de la población se traslada de la ciudad (ágora, polis) y la escuela a las nuevas tecnologías de la comunicación y a los modernos medios de comunicación.

La transición demográfica

América Latina vive un rápido crecimiento de la población urbana y del número de ciudades que se manifiesta en un universo urbano caracterizado por cuatro ciudades con más de 10 millones de habitantes y 28 urbes con una población que supera el millón. Esto significa que hay 32 áreas metropolitanas, convertidas en las plataformas a partir de las cuales la globalización se sustenta y desarrolla.

La creciente concentración de población en áreas urbanas tiene su contraparte en la reducción significativa de las tasas generales de urbanización (Villa, 1994). En 1950, el 41% de la población vivía en ciudades y en el año 2000 se estimó en el 75% (Lattes, 2002: 50). En medio siglo casi se duplica el porcentaje de la población urbana, la población mayoritaria de la región tiene a la ciudad como su modo de vida y se convierte en el continente con mayor porcentaje de población urbana del mundo, gracias a una urbanización tardía pero más rápida que en otras latitudes.

Como consecuencia del proceso anterior, la tasa de urbanización se reduce desde 1950 cuando de 4,6 pasó a 4,2 en 1960; a 3,7 en 1970; a 3,2 en 1980; a 2,6 en 1990 y a 2,3 en 2000 (Hábitat, 1986) y se prevé que en 2030 se ubique en alrededor del 1%. Este fenómeno se produce por el descenso de las tasas de migración campo ciudad y del crecimiento vegetativo de la población urbana y rural.

Con estas cifras se puede afirmar que en Latinoamérica se cerró el ciclo de la migración del campo a la ciudad y se abrió un inédito proceso de distribución territorial de la población, donde se destacan dos de sus expresiones más relevantes:

- Un redireccionamiento de los flujos poblacionales desde los lugares históricos de la urbanización hacia territorios periurbanos de las gran-

des ciudades y hacia ciertos lugares dinámicos de las economías nacionales vinculados a los bloques regionales en emergencia.

- La apertura de la migración internacional, convertida en un componente fundamental del proceso de globalización para América Latina, en tanto se puede afirmar que es la forma de inserción de las ciudades de la pobreza al proceso de globalización, pero se trata de una inserción asimétrica pues se vinculan al proceso solo una parte de las ciudades, añadiendo un nuevo elemento a la segregación urbana, esta vez, de carácter interurbano.

Del escenario de esta nueva “coyuntura urbana” surgen desafíos y potencialidades que deben ser conocidas y adoptadas dentro de las políticas urbanas. Por ejemplo, que la ciudad es menos un problema y más una solución: las demandas sociales ahora son menores en lo cuantitativo (más agua) pero mayores en lo cualitativo (mejor agua). La conformación de “comunidades translocales” nos lleva a preguntar: ¿cómo pensar las ciudades de hoy que no solo que están dispersas en el territorio sino que están en otros países e, incluso, en otros continentes?

Pero también desafíos, entre otros, respecto a los modelos de gestión de los servicios cuando estos se han diversificado (Internet, agua potable) y se han integrado entre ellos (energía eléctrica con transporte) y en territorios más amplios (sistemas multinacionales integrados). Relacionados con la producción de espacios públicos cuando se percibe con fuerza lo que Jordi Borja (1994) llama agorafobia o un poder local más fuerte frente al Gobierno nacional pero que es más débil frente a la ciudad porque el mercado se ha hecho fuerte.

Este conjunto de cambios que se viven en las ciudades de la región plantean algunas interrogantes respecto a la seguridad ciudadana y la convivencia de la población; sobre todo porque *la ciudad* tiene la función estratégica de concentrar la organización delictiva y la violencia (se urbanizan), porque existen conflictos urbanos no resueltos (se especializa en un tipo particular de violencia) y porque se convierte en plataforma de esta avanzada global del crimen (nodo).

En dicho marco se identifican dos tendencias que caracterizan a la región desde mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado: la significativa disminución de la tasa de urbanización a prácticamente la mitad² y, en contrapartida, la duplicación de la violencia urbana en el mismo período.³ Sin duda que estos indicadores —entre otros— nos deben llevar a estudiar, analizar y reflexionar sobre los vínculos riesgo-violencia-ciudad-seguridad.

En los últimos años la violencia urbana se ha convertido en uno de los componentes más importantes de la ciudad latinoamericana, no solo porque el temor se convierte en el imaginario urbano más significativo sino también porque la violencia objetiva hace presencia con mucha fuerza en las ciudades de la región. Lo uno y lo otro cambian el paisaje urbano, fragmentan la organización del territorio, las ciudades de ciudadanos dan paso a la foraneidad y las políticas urbanas se securitizan, con lo cual se entra en un círculo vicioso o en una lógica de causación circular, donde cada hecho genera menor convivencia y más violencia.

A la violencia objetiva se debe añadir la violencia subjetiva (el miedo, el temor, la percepción de inseguridad). Hoy en día el imaginario del miedo se ha convertido en uno de los elementos principales que definen las prácticas conductuales de la población urbana. Además el riesgo y el temor se han convertido en factores limitantes de la libertad y del debilitamiento del sentido de ciudadanía, en tanto se ha posicionado con fuerza el sentido del miedo al otro. Una problemática de estas dimensiones debe llevar a pensar en el tipo de seguridad que se debe construir, a quién debe estar dirigida y cuáles deben ser los actores privilegiados.

De esta manera, a los problemas tradicionales de la ciudad latinoamericana se han sumado estos del temor, la convivencia y la violencia. En unos casos de forma autónoma y en otros asociados, por ejemplo, a la

2 América Latina tuvo en 1950 una tasa de urbanización de 4,6 y en 2000 de 2,3 (Hábitat, 1986).

3 “En 1980, el promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes era de 12,5 al año. En 2006 fue de 25,1 lo que significa que la criminalidad se ha duplicado en el último cuarto de siglo” (Kliksberg, 2008).

búsqueda de la localización de la población, del acceso a los servicios, del desempleo o de la informalidad, entre otros.⁴

El marco histórico del momento está signado por el impacto que tiene la crisis económica en los distintos planos del convivir ciudadano, que –para el caso que nos convoca– tiende a redefinir los componentes de la ecuación: ciudad/inseguridad y sus relaciones. Así, por un lado, en la ciudad se siente su peso en algunos de los sectores clave del desarrollo urbano como son –por ejemplo– el inmobiliario y el empleo, y por otro, en la propia violencia se percibe cambios cualitativos y cuantitativos.

Por esta razón, la Alcaldía de Quito, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) y el Centro Internacional de Formación de las Autoridades y Agentes Locales (CIFAL) de Barcelona, con el apoyo de la empresa Veolia Environment y Proactiva Medio Ambiente organizaron el 27 y 28 de junio de 2008 en Quito la conferencia internacional denominada *Políticas urbanas integrales y convivencia en las ciudades de América Latina. Servicios urbanos e inclusión*. En el evento se trataba de poner en cuestión, debate y discusión los desafíos de cómo construir políticas integrales de ciudad que permitan mejorar la convivencia inter-ciudadana para reducir los intolerables índices de violencia existentes.

En esta ocasión y con el ánimo de generar un mayor impacto a través de la socialización de los resultados de los debates desarrollados en la mencionada conferencia, se pone a consideración de la audiencia especializada –académicos, técnicos, funcionarios y estudiantes– los resultados, con la finalidad de impulsar el necesario intercambio de experiencias y de conocimientos para promover un análisis más certero en las políticas de reducción de la violencia.

Este libro, a la manera de una memoria del evento, ha organizado las ponencias presentadas bajo una lógica de exposición que cuenta con

4 Los efectos económicos son cada vez mayores. En Colombia, según información de Echeverri (1994), el Ministerio de Salud estimó que en 1993 la violencia causó pérdidas por \$ 1.250 millones. En gastos de atención a heridos por violencia, el Ministerio gastó casi \$ 100 en ese año, lo que podría asegurar la vacunación completa de los niños colombianos en los próximos 20 años.

una presentación de intervenciones protocolares y cuatro secciones. Las intervenciones protocolares agrupan una serie de percepciones de instituciones y actores involucrados en la temática central que permite otear el horizonte y contextualizar los servicios urbanos y la inclusión en el marco de las políticas urbanas integrales en América Latina; una primera sección dedicada a la temática de la gestión urbana y la convivencia, que busca mostrar cómo las políticas urbanas pueden procesar los conflictos de la ciudad para potenciar las relaciones ciudadanas; una segunda que pretende entender al espacio público como una arena constructora de integración social que genera respeto al otro (otredad); una tercera sección dedicada a los temas de la provisión de los servicios y de accesibilidad a la ciudad como forma de construcción de la base material de la convivencia; y la cuarta vinculada al riesgo que nace de la diferenciación y la exclusión social como elemento de la violencia.

El marco institucional del encuentro

En este contexto es Carlos Lopes, Subsecretario General de las Naciones Unidas y Director de UNITAR-Suiza, quien describe el punto de confluencia entre UNITAR (con el Programa Local de Desarrollo para fortalecer la gobernabilidad local y las acciones para el cumplimiento de los objetivos del milenio), CIFAL (mediante la Red Convival sobre Políticas Urbanas Integrales y convivencia en las ciudades de América Latina), la FLACSO, sede Ecuador (a través del Programa de Estudios de la Ciudad) y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ). Y no es casual que ello ocurra debido a la dinámica que la violencia tiene: creciente internacionalización sobre la base de espacios translocales. En dicho marco surge la propuesta de creación de la Red Convival de orden temático y funcional cuya actuación busca ser el resultado de las investigaciones generadas a la luz de elementos de comprensión, identificados por UNITAR, que permita adaptar las decisiones de la Red a cada orden local, facilitando la mejora de la calidad de vida en las ciudades de la región.

De forma inmediata a la visión planteada por UNITAR se suma, para enriquecer el análisis, la perspectiva de CIFAL-Barcelona a través de su director Carlos González, con planteamientos que permiten identificar al proceso de urbanización masiva como un factor determinante en la transformación de las formas de vida, el cambio en las relaciones sociales-económicas y los nuevos riesgos y conflictos como amenaza a la cotidianidad en las ciudades. Por lo que la atención debe centrarse en el análisis de la disminución del conflicto y en las acciones que los gobiernos locales deben realizar para el cumplimiento de este objetivo; con el propósito de que la ciudad goce de los beneficios de un buen orden, una buena red de servicios públicos y el fortalecimiento de la participación ciudadana en contraposición a las fuerzas del mercado

En este sentido, se centra el planteamiento en la identificación de algunos factores determinantes para lograr una ciudad viva, como pueden ser: la participación activa de los ciudadanos que permita fortalecer el sentimiento de pertenencia; y, por ende, de seguridad, la generación de mecanismos de mediación que potencien la coexistencia pacífica de diversos grupos en el espacio público y la garantía del acceso a los servicios públicos en especial a la seguridad y a la justicia.

Desde Veolia Environnement, S. E. Joachim Bitterlich (Jefe de asuntos internacionales, Veolia Environnement) plantea una serie de interrogantes en torno al cuestionamiento de la ciudadanía, en contextos carentes de servicios básicos eficientes y de la exclusión social como activadores de violencia, dinámicas a través de las cuales se busca una respuesta mediante la identificación de las buenas prácticas del urbanismo sostenible y del análisis de las directrices de acceso a los servicios esenciales. Para lo cual, a través del Observatorio de los Modos de Vida Urbanos, se han identificado las preocupaciones de las poblaciones del mundo con el propósito de encontrar respuestas a sus necesidades. Dentro de esta perspectiva se puntualiza, como factor fundamental para mejorar los servicios públicos, la cooperación público-privada, lejana a una lógica de privatización, se propone como exitosa la delegación de la gestión del servicio al sector privado y la conservación en el ámbito público del control de la operación y la propiedad de la infraestructura.

Es decir, para Veolia Environnement y Proactiva Medio Ambiente, sí se considera que la gestión eficiente de los servicios públicos contribuye a mejorar las ciudades y a favorecer la sinergia entre lo público y lo privado, repercutiendo en el mayor acceso a los servicios urbanos.

La Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, a través de su alcalde Paco Moncayo (2000-2008) cierra esta reflexión introductoria enfatizando la importancia de alcanzar los Objetivos del Milenio desde las ciudades, en el marco de la incidencia del incremento de la urbanización en las dinámicas sociales y de las ventajas de la alianza público-privado como determinante de la gestión de los gobiernos locales. En esta perspectiva se destaca la confluencia transversal de instituciones y se señala el ejemplo creador que viene realizando CIFAL y UNITAR en la región.

Gestión urbana integral y convivencia

Nunca como ahora el delito opera a escala mundial y nunca como ahora las ciudades se han convertido en los nodos privilegiados de un poder económico y político mafioso. Con el paso de la violencia tradicional a la moderna que se produce desde mediados de los años ochenta del siglo pasado (Carrión, 2009), la organización del delito y la violencia han dejado de ser un hecho marginal a la economía y a la política. De esta manera la violencia –en la hora actual– se ha convertido en una problemática fundamental para la comprensión de la ciudad, la economía⁵ y la política;⁶ así como de la medición de la calidad de vida de los habitantes.⁷

5 El BID mostró en un estudio que para el año 2000 el costo de la violencia le significó a la región la pérdida del 14,2% del PIB. Esto es, \$ 168 mil millones. (Londoño y otros, 2003).

6 El descrédito de la justicia y la policía van de la mano de la impunidad, de la ineficiencia de las políticas y de la infiltración que hace el crimen de las instituciones. Pero también hay que señalar la presencia de estas organizaciones en las instituciones más representativas de la democracia como los sistemas parlamentarios, los medios de comunicación y los órganos de gobierno.

7 El temor se ha convertido en el imaginario urbano más importante a la hora de la organización de la ciudad y del comportamiento de la población. Y no se diga, la existencia de un promedio anual de más de 150 mil homicidios por año.

El abordaje de esta dimensión de la problemática debe tener en cuenta los escenarios mundiales y urbanos, que son los espacios de expresión principal de las violencias. Un primer elemento a considerarse en este contexto debe ser el cambio del punto de vista de la seguridad, dado que se producen dos modificaciones importantes: por un lado, con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, se desplaza la seguridad, de la seguridad pública (defensa del orden público estatal frente a enemigos internos) hacia la seguridad ciudadana (convivencia ciudadana y respecto a las garantías civiles). Y por otro, este desplazamiento conduce a un proceso de reconstrucción de la gestión pública de la seguridad, sustentada en una pluralidad de actores (municipios, privados) y en múltiples procesos que terminan por configurar una política pretendidamente integral gracias a la fusión de las políticas urbanas con las políticas de seguridad.

Pero también porque gana terreno, dentro de las políticas de seguridad ciudadana, la estrategia de prevención como una propuesta externa y anterior (*ex ante*) al hecho delictivo, la que requiere de la universalización en tres dimensiones: local-global, intersectorial y pluri-institucional; conformando un sistema donde el conjunto de los actores nacionales e internacionales deben estar articulados. En este marco se aborda la importancia de la participación social dentro de lo que implica la predisposición de escuchar el uno al otro, considerando el interés por conocer la intención que motiva el fortalecimiento de las relaciones sociales (capital social).

En esta perspectiva se presentan, en el primer capítulo, trabajos que buscan relacionar lo internacional y lo local, en el entendido que el delito vive una fase de globalización que requiere de lugares estratégicos —las ciudades— para actuar y proyectarse: lo local. Pero también en la necesidad de enfrentar esta nueva lógica del delito en los mismos escenarios en los que se despliega: global-local.

Un acercamiento capaz de caracterizar las ciudades a través de una tipología y reflexión nacida de los obstáculos que surgen en el proceso de diseño y formulación de políticas de seguridad en los gobiernos locales lo encontramos en los textos de Jordi Borja, Antanas Mockus y Diego Carrión, contenidos en el primer capítulo de esta publicación.

Helena Rovner expuso un estudio delegado a Ipsos Internacional por Veolia Environnement y Proactiva Medio Ambiente cuyos resultados de la encuesta de opinión pública, aplicada por el Observatorio de los Modos de Vida Urbanos, reflejan los impactos producidos por la ciudad en la vida de la gente y el tipo de vida que tiene la población en las ciudades; identificando los sentimientos de confianza y apego de los ciudadanos a las ciudades sobre el presente y futuro de la misma. Los resultados del análisis de los elementos relacionados con la calidad de vida anuncian que los ciudadanos reclaman, de la ciudad, la mejora del costo de vida, la seguridad, el medioambiente y el transporte. A la vez que se establece una tipología de ciudades clasificándolas en: prácticas y culturales, del buen vivir, festivas, de dinamismo económico, neutras y del temor; conduciendo los resultados a delinear lo que puede ser considerada una ciudad ideal capaz de agrupar diversión, movilidad, limpieza, arquitectura, oferta cultural, dinamismo económico, facilidades para conocer gente y diversidad de población. Llegando a la conclusión que la ciudad demanda un balance entre el tiempo productivo y el tiempo para estar con uno.

Gustavo Beliz, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destaca el principio de convivencia y la importancia de los gobiernos locales como actores de la formulación de políticas de seguridad ciudadana. Plantea que cuando se trata de abordar el principio de convivencia, éste es visto como algo más amplio que la seguridad ciudadana y se lo vincula con el desafío de la gestión integral de políticas en esta materia; para lo cual se considera necesario focalizar el concepto de ciudad, definirla bien, dado que no basta con que un territorio sea considerado urbano para ser calificado como ciudad. Beliz identifica cinco obstáculos que surgen cuando se trata de gestionar políticas de seguridad ciudadana: 1) el crimen está organizado y el Estado no lo está para enfrentarlo. 2) Las leyes que se sancionan no se cumplen. 3) La privatización *de facto* de las políticas de seguridad ciudadana. 4) La falsa opción entre las políticas de control y de prevención de la violencia. 5) La corrupción.

Jordi Borja, Director del Programa de Posgrado de Gestión de la Ciudad, Universitat Oberta de Catalunya, a través de un análisis de la

Gobernabilidad y los Nuevos Territorios reflexiona respecto al desgobierno metropolitano, puntualizando que la urbanización no equivale a crecimiento de la ciudad y tampoco solo al progreso de la ciudadanía. En este sentido, se plantea la necesidad de políticas públicas potentes y concertadas, planes estratégicos, infraestructura y planteamientos urbanísticos favorables a la cohesión social; se trata de “inventar” formas de gobierno democrático para los nuevos territorios urbanos. En este marco, Borja delinea estrategias urbanas desde diversas entradas de análisis: la infraestructura de comunicación y construcción de territorio metropolitano, las áreas de nueva centralidad, las políticas de suelo y vivienda e integración de la marginalidad residencial, la ciudad del conocimiento y la nueva economía, los corredores ecológicos, los centros y barrios históricos, los corredores culturales y áreas de oportunidad. Caminos a través de los cuales se redescubre a las redes de transporte como ordenadoras del desarrollo de una región metropolitana, se identifica los objetivos de las nuevas áreas de centralidad en las conurbaciones metropolitanas, se analiza las implicaciones de los actuales desarrollos urbanos en las ciudades-regiones metropolitanas, se describe la nueva economía como resultado de la internacionalización de la actividad económica y de la difusión de las nuevas tecnologías de la comunicación, y se conceptualiza la base del urbanismo de la ciudad metropolitana junto a los valores que reinan en la población que la conforman. A modo de reflexión final, Borja propone generar una política derivada del reconocimiento de los derechos de la ciudadanía identificando como condición fundamental, para este propósito, que los derechos ciudadanos sean realmente efectivos.

Desde un enfoque local *Antanas Mockus*, ex alcalde de Bogotá, reconstruye su escenario de gestión enfatizando la preocupación por el incremento de la tasa de homicidio y centra su propuesta en el interés por disminuir los crímenes mediante la reconstrucción de la regulación legal, la autorregulación y la regulación cultural para mejorar el ejercicio de la ciudadanía. Plantea la ciudadanía como un proceso de construcción y conduce la reflexión a la descripción de los aspectos que movilizan al ser humano; siendo *los motivos* (intereses, razones y emociones) y *las reglas* (ley, moral, cultura) factores fundamentales a considerar en la

construcción de ciudadanía. Expone *la emoción* en relación con *la seguridad* y conduce la reflexión hacia la identificación del miedo razón por la cual enfatiza que durante su Alcaldía se habló poco de seguridad y más de legalidad y ciudadanía, recalcando la importancia de tratar al otro como ciudadano para volverlo ciudadano. Centraliza el tema de la eficacia en el respeto a la *Constitución* y a las leyes dado que el Estado no puede bajarse a hacer terror para combatir el terrorismo.

Desde la Dirección de Planificación Territorial del MDMQ, **Diego Carrión** realiza una breve visión de la planificación de la gestión integral municipal desde 2000. Recorrido que identifica procesos de planificación estratégica, planificación operacional y planificación sectorial manifestos en el Plan Equinoccio Siglo XXI, el Plan Bicentenario y los Planes Maestros y Sectoriales, respectivamente. Planificación que marca una diferencia con el resto de ciudades del país. En este sentido, explica D. Carrión, es a través del Plan Estratégico que se define un conjunto de políticas para la gestión del desarrollo desde una perspectiva democrática, lo que implica pensar la planificación para el desarrollo con sentido estratégico y con la coparticipación público-privada. Políticas que se expresan en la creación de un sistema de gestión municipal concretado en proyectos y programas de: reubicación de los vendedores ambulantes, implantación del sistema de gestión participativa y de rendición de cuentas, mejoramiento de la calidad de vida en los barrios populares, incorporación de una perspectiva de inclusión y género, incremento de áreas verdes, recuperación de barrios tradicionales, ampliación de la red de alcantarillado, incremento de la actividad cultural, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Informe que conduce a reflexiones finales en torno a la importancia de la construcción de sociedades más justas y ciudades eficientes, considerando la necesidad de diseñar un sistema estructurado de participación para el ejercicio democrático en los procesos de toma de decisiones con la perspectiva de crear una ciudad del diálogo y la palabra.

Espacio público, cultura ciudadana y convivencia

Como la ciudad concentra un grupo poblacional grande, denso y heterogéneo (Wirth, 1988) requiere de espacios de encuentro y contacto, tangibles (plazas) o intangibles (imaginarios), que permitan reconstruir la unidad en la diversidad (la ciudad) y definir la ciudadanía (democracia). Esos lugares son los espacios públicos, los cuales son un componente fundamental para la organización de la vida colectiva (integración, estructura) y la representación (cultura, política) de la sociedad.

El espacio público es uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía porque permite reconstruir el derecho a la asociación, a la identidad, a la inclusión y a la polis. Este derecho al espacio público se inscribe en el respeto a la existencia del derecho del otro, porque no solo se necesita un espacio donde encontrarse, sino un espacio donde construir tolerancia. Es una pedagogía de la alteridad nacida del aprendizaje a convivir con otros de manera pacífica y tolerante. En el espacio público deben coincidir las múltiples voces, manifestaciones y expresiones de la ciudad —porque solo es posible encontrar la heterogeneidad de la urbe en el espacio público— y hacerlo armónicamente en un ámbito de tolerancia y respeto. Pero, además, se requiere de una institucionalidad y políticas (urbanas, sociales) que procesen las diferencias y construyan la integración en ese contexto. Por eso, más ciudad es aquella que optimiza y multiplica las posibilidades de contacto de la población, es decir, aquella que tiene buenos espacios públicos. De allí que no se trata de mejorar el espacio público sino de construir uno nuevo, en el marco de un nuevo urbanismo.

Desde esta premisa salta a la vista la necesidad de contar con métodos y políticas eficaces para el desarrollo urbano innovador, de tal manera de que se intervenga desde una perspectiva incluyente, de alta calidad estética y que cuente con la posibilidad de potenciar los universos simbólicos que son portadores sus ciudadanos. Hay que diseñar proyectos de transformación urbana para afrontar los problemas locales en materia de convivencia, surgidos del conocimiento de los procesos particulares ocurridos en las ciudades de la región.

Para ello, esta sección se inicia en materia de Gestión de los Espacios Públicos con un trabajo de **Fernando Carrión**, Concejal del Municipio de Quito y Coordinador del Programa de Estudios de la Ciudad de FLACSO, sede Ecuador. El trabajo aborda el tema de la Violencia Urbana a partir de la identificación de algunos puntos centrales: la relación entre la ciudad y la violencia, la causalidad de la ciudad en la violencia, la relación violencia-conflicto, el impacto de la violencia en la ciudad. Puntos de análisis que conducen la reflexión hacia el estudio del impacto de la concentración de la heterogeneidad como base para la generación de conflictos, considerando que la ciudad per se está vinculada a una conflictividad propia. Aspectos que precisan establecer la diferencia entre conflicto y violencia; así, F. Carrión describe el conflicto como la relación entre personas desiguales y la violencia la expone como resultado de una relación social de conflicto que termina desbordando la institucionalidad social y la institucionalidad pública. La ausencia de una clara identificación, diferenciación y gestión de estos aspectos ha llevado a varios equívocos, uno de ellos manifiesto en el desinterés de las políticas urbanas provocando el descuido en la administración del espacio público donde lo mínimo termina siendo el origen de un caos. Reflexión que conducirá el análisis al impacto que provoca la violencia en la ciudad identificando tres modificaciones temporales y espaciales: el incremento del tiempo de uso de la ciudad, la reducción del espacio público, la pérdida del sentido de ciudad-ciudadanía. Lo que evidencia cambios profundos de la ciudad a partir de lo que significa la violencia. Finalmente se abordan reflexiones en torno a algunas interrogantes: ¿existe una violencia típicamente urbana? ¿De existir una violencia urbana, cómo debe ser tratada? ¿Cómo se expresa la violencia según el espacio en el que se manifiesta, sea este público o privado? Por lo que la propuesta consiste en crear una política de intervención en el marco de una política de prevención como parte de las políticas de planificación.

Hélène Rivière d'Arc, CNRS-CREDAL/Francia, comienza su planteamiento con el análisis de los cambios sociales y, a partir de ellos, delinea el rol de la gestión urbana desde la perspectiva de las transformaciones de las construcciones urbanas antiguas en el contexto de los cambios

producidos en algunas grandes ciudades de Europa y América Latina. Un repaso por la historia de la configuración de los centros de las ciudades y su conceptualización nos conduce hacia la explicación del origen y descripción de las políticas urbanas centradas en la revitalización, regeneración y recuperación de los espacios construidos como centros de las ciudades. Utilización y dominio de estos nuevos conceptos, aspectos o instrumentos de urbanismo que, para H. Rivière d'Arc, implica suponer que los poderes públicos están en la posibilidad de ejercer una regulación sobre el espacio que visibilice en los centros de las ciudades, las calidades patrimoniales y de interrelaciones sociales múltiples, acumuladas y sedimentadas por la historia. De esta manera, H. Rivière d'Arc plantea la necesidad de identificar y definir los roles del espacio antiguo construido y del centro urbano en el marco de las nuevas configuraciones sociales.

En materia de cultura ciudadana y convivencia, las preguntas giran en torno a ¿cómo controlar los comportamientos en la ciudad sin moralizarlos? ¿Cómo fomentar y controlar las políticas preventivas y participativas sin perder legitimidad gubernamental?

Al respecto, **Andrés Antillano**, investigador de seguridad ciudadana de la Universidad Central de Venezuela, expone la necesidad de relacionar los procesos urbanos con la política y la seguridad. Se identifica a la violencia, al crimen y al miedo como los generadores del fracaso de la articulación de los individuos en la ciudad. Así, para A. Antillano, el problema de la inseguridad se encuentra en una dimensión política y no técnica. Planteamiento que guía su reflexión hacia la descripción de la relación entre la ciudad y la violencia, las fuentes urbanas del delito, la seguridad y la política. Utilizando una doble perspectiva: los efectos políticos de la inseguridad y la dimensión política de las estrategias de seguridad. En su reflexión final propone una ciudad democrática para una política democrática de seguridad.

A este marco de reflexión en torno al espacio público, cultura ciudadana y convivencia se suma la exposición de **Gustavo Rodríguez**, director general de Agua y Drenaje de la Ciudad de México, quien destaca el reto que tiene esta ciudad por el agua potable en un contexto con exce-

so de población cuya demanda incrementa día a día. Para lo cual se plantea, entre otras propuestas, la creación de una política inductiva que favorezca el uso racional del agua potable, su reciclamiento en procesos industriales y unidades habitacionales y el control de las tarifas como uno de los mecanismos para racionalizar el uso.

Acceso a la ciudad, servicios y convivencia

Uno de los temas principales en las ciudades de América Latina tiene que ver con el acceso de los pobres a la ciudad: más de 300 millones de pobres están concentrados en el área urbana de la región, pero muchos de ellos no gozan del derecho pleno a la ciudad. Por eso, durante mucho tiempo se los llamó a estos sectores poblacionales como marginales (al margen), informales o ilegales (fuera de la ley), lo cual mostraba que no tenían acceso a la ciudad. En gran parte esta situación proviene de la relación entre mercado del suelo urbano y vivienda; donde el suelo debe ser habilitado como un soporte central para la vivienda.

El precio del suelo que se realiza en el mercado proviene, entre otros, de la producción de los servicios y equipamientos –habilitación–, de la regulación urbana y de la especulación inmobiliaria; de allí que llame la atención la fuerte incidencia que tiene en el precio final de la vivienda, al extremo que sube más el precio del suelo que el producto total de la vivienda. De allí que no solo se trata de producir más suelo en buenas condiciones, sino que tenga un precio de acuerdo con los costos de su habilitación. Esto hace pensar que la habilitación del suelo urbano es uno de los elementos más importantes en la producción de vivienda y, por tanto, en el acceso a la ciudad.

De allí que densificar con vivienda de interés social en la periferia –para bajar precios– no significa producir ciudad. Construir urbanizaciones cerradas, prácticamente autárquicas, para gente de altos recursos económicos tampoco produce ciudad. La penuria de la vivienda tiene estas dos caras de la misma moneda: la producción de viviendas sin ciudad genera ciudadanos sin ciudad, lo cual deviene en que el derecho a la vi-

vienda es también derecho a la ciudad y que la nueva vivienda genera un nuevo urbanismo. Producir vivienda debe conducir a producir ciudad.

Obviamente que la buena y democrática Gestión de los Servicios Básicos produce ciudadanía, porque otorga el derecho a la ciudad y, por tanto, convivencia; pero no se puede negar la necesidad de absolver, al menos, las siguientes interrogantes: ¿cómo construir una red de infraestructuras de punta que permita, por un lado, producir un ensamble internacional que articule a la ciudad a las ciudades globales y por otro, satisfacer las demandas sociales de la población?, ¿cómo construir una sociedad que impida cualquier forma de exclusión y asegure el acceso a los servicios y equipamientos urbanos? y ¿cómo gestionar los servicios públicos de manera integral y con la participación de todos los actores públicos? Responder estas interrogantes también nos lleva a reflexionar respecto a los modelos de gestión, los costos-tarifas, la accesibilidad e inclusión de la población y las formas de convivencia que conduzcan a la seguridad ciudadana y a una ciudad de derechos.

En ese contexto y desde esa perspectiva, el trabajo desarrollado por la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q) destaca el compromiso con la ciudadanía a través de la oferta de servicios básicos de calidad en el marco de una gestión responsable, como lo expone **Juan Neira Carrasco**, gerente de la EMAAP-Q. Este trabajo implicó la definición de una política tarifaria incluyente, subsidios focalizados, gestión comercial y promoción social efectiva, responsabilidad ambiental y responsabilidad social.

Sin duda que uno de los temas más importantes en la habilitación del suelo y el acceso de la población a la ciudad tiene que ver con la movilidad urbana. La temática conduce al análisis de la búsqueda de respuestas a la relación entre transporte, ciudad y convivencia, de tal manera de asegurar el acceso al sistema integrado de transporte público para todos y lograr la preservación del entorno.

Ricardo Montezuma, de Ciudad Humana, describe la aplicación del proyecto de movilidad en Bogotá destacando la necesidad de crear escenarios de equidad e integración social a través de la construcción de una ciudad segura; en este sentido, se destaca el interés en abordar los problemas

de seguridad y movilidad porque son propios de casi todas las ciudades y reflejan un problema estructural: la inequidad. R. Montezuma resalta el cambio en/de las ciudades como elemento fundamental para superar la crisis; propone los siguientes factores a ser considerados para acelerar los cambios: el fortalecimiento del gobierno municipal como motor de las transformaciones locales, el impulso de las acciones vinculadas a la conectividad y la competitividad entre ciudades, la participación ciudadana y las crisis urbanas. De forma concreta, en el caso de Bogotá, los cambios radicarían en el incremento del sentido de pertenencia, el desarrollo de nueva infraestructura y la aplicación del enfoque de movilidad como un modo de integración de las políticas de ciudad, territorio, transporte y participación ciudadana. Definiendo a la movilidad no como un fin sino como una consecuencia si se implementa cada una de las políticas anotadas.

Marco Carmach, director de Transantiago-Chile, expone la necesidad de entender a las ciudades como plataformas de desarrollo y de competitividad. Interpretando a M. Carmach se puede decir que para ingresar a la lógica de la competitividad se debe conceptualizar al transporte y a las telecomunicaciones como una de las ventajas de las ciudades dado que el transporte estructura y sustenta a las ciudades y su crecimiento, convirtiéndose en un elemento estratégico en términos de competitividad. Según lo explica, dicho enfoque plantea el desafío de integrar competitividad con calidad de vida donde la movilidad, la conectividad, el acceso ciudadano y el servicio coexistan de forma armónica, destacando como esencial el desarrollo con igualdad.

Con el propósito de ampliar esta reflexión introductoria en torno al acceso a la ciudad, los servicios y la convivencia se suman los aportes de los representantes de la empresa Veolia Environment y Proactiva Medio Ambiente, cuyas propuestas fueron expuestas en el seminario y sus síntesis permiten realizar un acercamiento a casos puntuales de aplicación de proyectos en contextos locales.

En el caso de la Ciudad de México, **Otto Granados Roldán** (ex gobernador de Aguascalientes y actualmente profesor de Políticas Públicas, Tecnológico de Monterrey, México) expone tres variables que posibilitan conocer la manera de prestar servicios públicos en la región: el proceso

racional en la toma de decisiones, las implicaciones sociales-económicas-políticas y la armonización de la eficiencia en la prestación de los servicios públicos-básicos. O. Granados considera la racionalización como un proceso para la toma de decisiones lo que implica enfrentar tres dilemas: la compatibilización de los servicios, el prever que la variable aislada no tenga una repercusión en la convivencia armónica y la administración de la variable política. A lo que se suma la necesidad de considerar las implicaciones económicas, políticas y sociales que pueden llegar a expresarse en una deficiente comprensión de la decisión política tomada, una decisión impopular o en un beneficio integral para la promoción del servicio y sustentabilidad del proyecto a largo plazo. Finalmente, se plantea la necesidad de analizar cómo armonizar la eficacia en la relación entre la prestación de servicios públicos básicos con la inclusión social y con la convivencia urbana en las políticas públicas; abriendo un campo de nuevos debates que nos llevan a pensar en una nueva construcción de la gestión pública capaz de crear las condiciones favorables para aumentar el capital social, económico, humano e institucional, y ofrecer resultados concretos, medibles y tangibles a los ciudadanos. Por lo que, de lo que se trata es de administrar la variable política y crear una nueva pedagogía comunitaria para lograr dos objetivos: internalizar el diagnóstico real y armonizar este diagnóstico con los beneficios a mediano y largo plazo.

En lo que respecta a la prestación actual del servicio en Aguascalientes en México, **Humberto Blancarte** (Proactiva Medio Ambiente) expuso el trabajo realizado por Proactiva Medio Ambiente (CAASA) como empresa operadora del servicio de agua potable y saneamiento. Proyecto con alto grado de eficiencia, cuyo éxito se fundamenta en una amplia identificación del contexto y su problemática (gestión eficaz del recurso en una zona semidesértica); así como en una clara y viable modalidad de cooperación público-privada que ha dado óptimos resultados: la ampliación de la cobertura de agua potable al 95% de la población y de alcantarillado al 98% (10 puntos por encima de la media nacional en México). Resalta igualmente la factibilidad real de llevar a cabo actividades productivas bajo un esquema de responsabilidad social en el que se destaca la educa-

ción ciudadana para generar un consumo racional del recurso y la preservación del entorno de acuerdo a las demandas actuales.

Desde la provincia de Misiones, Argentina, **Horacio Blodek** (Ministro de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo de Misiones) y **Luis Arnaldo Jacob** (Ministro Secretario de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, Veolia Environnement) presentaron el proceso que implicó, en la provincia, el diseño e implementación de un proyecto para la gestión integral y la disposición final de los residuos sólidos, el impacto en la convivencia y la influencia en la toma de decisiones. Al describir esta gestión como resultado de una decisión política, enfatizan que su aplicación no fue impopular, aspecto que se demuestra en el esfuerzo del gobierno provincial por dedicarse a resolver un problema urbano. Toma relevancia la realización de un proyecto compartido –público-privado– armónico con la necesidad local y capaz de vincular lo operativo con lo institucional. A lo que se suma la opinión de **Felipe Urbano**, director de Proactiva Medio Ambiente Argentina, empresa responsable de la gestión del sistema integral de residuos de la provincia, enfatizando la importancia de tener clara la modalidad de aplicación de todo proyecto y su gestión; así como la necesidad de contar con una política de comunicación capaz de sensibilizar y educar a la población y de dar visibilidad a los beneficios del sistema de trabajo aplicado. Se trata de un factor clave para favorecer una amplia participación por parte de los ciudadanos y, en consecuencia, una mayor inclusión social.

Riesgos urbanos e inclusión social

Hoy en día la producción social del espacio urbano se despliega a partir de los miedos y las violencias, venidas en gran parte del incremento que se vive de los riesgos sociales (antrópicos) y naturales. El miedo es mayor cuando es difuso y desconocido porque es una sensación que nace de la incertidumbre. Pero también se presenta por el sentimiento de vulnerabilidad ante un peligro potencial. Es decir que el temor tiene más que ver con la “ausencia de confianza en la defensa disponible” que en las características de la amenaza real existente (Bauman, 2007).

El Estado tiene entre otras funciones proteger a los ciudadanos que lo constituyen; sin embargo, desde hace tiempo se observa un desplazamiento de la protección de la seguridad colectiva hacia la personal, lo cual significa una delegación a los propios individuos. En otras palabras, frente a los desastres naturales, la violencia o las epidemias cada ciudadano debe hacer lo que puede para atenuar los efectos de las mismas: justicia por la propia mano o construir las murallas de su seguridad.

Las ciudades son más vulnerables que antes porque se han construido con un patrón de urbanización socialmente excluyente que se expresa en una constelación de espacios discontinuos (Castells, 1999); a la manera de una fragmentación urbana constituida por *enclaves fortificados* (Pires, 2008) que recurren a encierros en espacios cada vez más exclusivos, privados y aislados; cada uno de los cuales definen sus fronteras físicas con paredes, rejas, vallas eléctricas, perros, así como también con sus límites simbólicos compuestos por estigmas, percepciones e imaginarios. Estos bunkers pueden ser de carácter residencial (urbanizaciones), laborales (oficinas), ocio (clubes sociales y deportivos) y comerciales (*malls, shoppings*) y en ellos prevalece la autoprotección, porque el Estado y lo público se han hecho líquidos (Bauman, 2007). Es una lógica de encierro y exclusión que conduce a la presencia de la *foraneidad* (Carrión, 2008) como elemento constitutivo de la sociedad local, donde nadie confía en el otro debilitando el sentido de la comunidad que constituye la ciudadanía. En otras palabras: la violencia y el miedo, y su contraparte la seguridad privada y el amurallamiento, son parte de la causación circular que incrementa los riesgos y la exclusión.

Pero también las urbes viven en riesgo mayor porque el patrón de urbanización generado depreda la naturaleza y mina los recursos naturales, modificando las lógicas de su comportamiento.

El planteamiento expuesto por **Gastón Urquiza**, director del Área de Acción Comunitaria, Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED) de la Argentina, expone el caso del proyecto Ciudades Focales a través del cual se expresaron políticas integrales capaces de crear y generar esquemas colaborativos de trabajo. De ahí que el trabajo expuesto destaque la gestión asociativa como el camino para mejorar y

mantener acuerdos, fortalecer capacidades y encontrar soluciones. Así, G. Urquiza presenta el modelo de gestión asociativa implementado y aspectos metodológicos claves para motivar a la participación; tales como: la sensibilización e involucramiento comunitario, la participación con acuerdos claros, la visibilización de una línea de intervención, el equilibrio entre la demanda y la capacidad de respuesta, demostrando la importancia de la participación armonizada de los actores para lograr sostenibilidad y apropiación de una propuesta.

En el mismo contexto, **Germán Solinís**, del Programa Gestión de Transformaciones Sociales –MOST-UNESCO– Francia, identifica puntos centrales para la reflexión en torno a las regulaciones sociales y urbanas y los riesgos de la convivencia. Reflexión que lo aproxima a un par de propuestas y varias afirmaciones a manera de conclusión. Una breve interpretación del planteamiento de G. Solinís nos lleva a puntualizar la necesidad de considerar las nuevas coordenadas que imposibilitan conocer hacia dónde vamos dado que éstas surgen de procesos de globalización, mismos que se manifiestan con repercusiones directas en el espacio territorial; a lo que se suma la necesidad de tomar en cuenta los altos grados de densidad y de deterioro social como consecuencia de la desindustrialización, situación que nos une en un clamor por una nueva cultura que permita prácticas de convivencia cotidianas menos desiguales.

Para G. Solinís, reflexionar acerca de las regulaciones sociales y urbanas, en este escenario, implica: la lectura de la situación desde la perspectiva del modelo integracionista y desde la visión del modelo del conflicto, considerar que la única certeza con la que actualmente se cuenta es que no tenemos más certezas, abordar a la ciudadanía como vínculo entre la sociedad y la política, identificar la cohesión social como concepto fundamental de la sociedad y al Estado como elemento principal de la política. Expone riesgos de la convivencia manifiestos en la desigualdad y exclusión, el enfoque de la realidad en términos economicistas, el debilitamiento del Estado, la confusión de responsabilidades de los diferentes actores expresada en la gobernanza, la informalidad, la ausencia de calidad estética y de convivencia de los espacios. Propone sumarse a la red de profesionales de la ciudad y a la coalición de ciudades lati-

noamericanas y caribeñas de ciudades contra el racismo, la discriminación y la xenofobia. Entre sus conclusiones se encuentra la afirmación de que la seguridad es legítima pero no desarrolla ciudadanía ni resuelve el problema de la inseguridad.

Gonzalo Ramírez, desde la experiencia de San José de Costa Rica, cita requerimientos básicos para la gestión de una ciudad y define la necesidad de que el gobierno local se involucre en conducir y promover el desarrollo económico, considerando como básica la construcción de mecanismos de distribución y vinculación de actores, para lo cual ve necesaria la identificación de las características y dimensiones de cada ciudad con la finalidad de generar un determinado grado de integralidad, autonomía y una magnitud importante de recursos conducentes a lograr un determinado nivel de construcción y desarrollo.

Bibliografía

- Bauman, Zigmunt (2007). *Miedo líquido, la sociedad contemporánea y sus temores*. Barcelona: Paidós.
- Borja, Jordi (1994). *Barcelona, un modelo de transformación urbana*. Quito: PGU.
- Carrión, Fernando (ed.) (2002). *El regreso a la ciudad construida*. Quito: FLACSO, sede Ecuador.
- Carrión, Fernando (2008). "La violencia urbana: un asunto de ciudad". Mimeo.
- Carrión, Fernando (2009). *La seguridad en su laberinto*. Quito: DMQ / FLACSO, sede Ecuador.
- Castells, Manuel (1999). *La era de la información*. Barcelona: Siglo XXI.
- Echeverri, Óscar (1994). "La violencia: ubicua, elusiva, prevenible", en: Fernando Carrión (comp.). *Ciudad y violencias en América Latina*. Quito: PGU.
- Hábitat (1996). *La pobreza urbana: un reto mundial. La declaración de Recife*. Ciudad SI: Editorial Hábitat.

- Kliksberg, Bernardo (2008). “¿Cómo enfrentar la inseguridad en América Latina?” *Nueva Sociedad*, 215. Buenos Aires.
- Lattes, Alfredo (2002). “Población urbana y urbanización en América Latina”, en: Fernando Carrión (ed.). *El regreso a la ciudad construida*. Quito: FLACSO, sede Ecuador.
- Londoño, Juan y otros (2003). *Asalto al desarrollo: violencia y crimen en las Américas*. Washington: BID.
- Martner, Carlos (1995). “Innovación tecnológica y fragmentación territorial”. *EURE*, 63. Santiago.
- Pires Do Rio Caldeira, Teresa (2007). *Ciudad de muros*. Barcelona: Gedisa.
- Randolph, Rainer (2000). “Las mutaciones de lo urbano: de la red de ciudades a la ciudad ciudad-red”, en: Susana Finkelievich (comp.). *Ciudadanos a la red*. Buenos Aires: CICCUS / La Crujía.
- Sassen, Saskia y Sujata Patel (1996). “Las ciudades de hoy: una nueva frontera”. *Era urbana*, IV, 1. Quito: PGU.
- Sassen, Saskia (1997). “Las ciudades en la economía global”. *Ponencia presentada en simposio La ciudad latinoamericana y del Caribe en el nuevo siglo*. Barcelona.
- Villa, Miguel (1994). “Las fuentes de la urbanización y del crecimiento urbano de la población de América Latina. *La Era Urbana*, II, III. Quito: PGU.
- Wirth, Louis (1988). *El urbanismo como modo de vida*. México: UNAM.